



Resumen de Prensa

lunes, 29 de agosto de 2022

La mala gestión impide a las empresas acceder a 1.318 millones de fondos europeos

El CES muestra su inquietud por el reparto de los 878 millones que son responsabilidad de la Junta y por los otros 440 de actuaciones estatales

ÁNGEL BLANCO



VALLADOLID. Hasta el pasado mes de marzo, la comunidad ha recibido 1.318 millones de euros dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como parte de los fondos europeos Next Generation. De esa cifra, 878 millones de euros son fondos para la gestión directa por la comunidad autónoma y 440 millones corresponden a actuaciones a ejecutar por el Estado. Sin embargo, el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León alerta de que los estudios de seguimiento realizados ponen de manifiesto que «los desembolsos reales a las empresas están lejos de las cifras previstas». «Según estos datos, parece necesario mejorar la eficacia del sistema de gestión, para intentar acelerar al máximo posible la llegada de fondos a la economía real», sostiene la institución.

Además, el CES ha detectado «una falta de datos oficiales integrados respecto de la ejecución de los fondos, ya que no existe ninguna fuente oficial que, de manera centralizada presente los datos detallados respecto de la ejecución de los fondos». A este respecto, desde el organismo se insiste en que «se debe aumentar el esfuerzo por informar sobre el funcionamiento de los fondos y las convocatorias y garantizar la transparencia respecto a la



El presidente del CES, Enrique Cabero (de frente), con el presidente de las Cortes, Carlos Pollán. **EL NORTE**

ejecución y la llegada de fondos a la economía productiva real».

Entre las recomendaciones contenidas en el Informe sobre la situación económica y social de Castilla y León en 2021, que el Pleno del Consejo aprobó por unanimidad y que su presidente entregó hace unos días en las Cortes. El documento incluye 686 recomendaciones consensuadas por las organizaciones empresariales, sindicales, agrarias, de la economía social, de consumidores y expertos del CES que, según Enrique Cabero, «buscan respuestas al cambio de época al que es-

tamos asistiendo, aportando datos oficiales y conocimientos de los investigadores colaboradores» con el objetivo de «alcanzar acuerdos estratégicos para la comunidad y para la ciudadanía».

Plazos muy cortos

Por lo que a los fondos de la UE respecta, el 70% de las transferencias no reembolsables concedidas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia deberá ser comprometido por la Comisión Europea en 2021 y 2022, mientras que el 30% restante se comprometerá enteramente a finales

de 2023 y podrá ejecutarse hasta 2026. Por su parte, los recursos del REACT-EU deberán ser ejecutados en dos años (2021-2022).

«Se trata de plazos cortos, que van a exigir la mayor agilidad y simplificación por parte de las administraciones públicas gestoras de los fondos, para mejorar su eficacia y facilitar la llegada de los fondos al tejido productivo (especialmente en el caso de pymes y autónomos)», señala el CES, que considera «especialmente importante que los plazos para la presentación de los proyectos a las convocatorias sean razonables y realistas, evitando que como ocurre ahora mismo, los plazos apenas lleguen a los 10 días hábiles».

En los primeros años de entrega de esta lluvia de millones, las reformas tienen un peso mucho mayor que las inversiones, algo que según advierte el documento del consejo «debe tenerse en cuenta al interpretar la ejecución de los fondos, que están llegando a una velocidad muy inferior». El CES recomienda «un replanteamiento de la gestión que favorezca un mayor impacto de los fondos en la recuperación y transformación del modelo productivo», a la vez que considera que existe «una mayor dificultad de cumplimiento de los hitos en 2022 y 023».

A los representantes sociales de la comunidad les preocupa especialmente «que las convocatorias no se adapten a la realidad socioeconómica de Castilla y León» por estar diseñadas, en su gran mayoría, para todo el territorio español. Así que alerta de las «consecuencias negativas que un diseño inadecuado pueda tener en el empleo y la cohesión social y territorial».

Pequeños destinatarios

En este sentido, resulta necesario, reclama, «acelerar las convocatorias transformadoras vinculadas a los PERTES, las cuales deberían ser subvenciones 'nuevas' que puedan atender las necesidades del tejido productivo. Además, debe fortalecerse el equilibrio entre grandes proyectos tractores y convocatorias para pymes y autónomos».

Con un tejido empresarial for-

A los agentes sociales les preocupa que las convocatorias nacionales no se adapten a la realidad de Castilla y León

mado en su inmensa mayoría por microempresas, lo que Castilla y León necesita según el CES son proyectos que fomenten la creación de ecosistemas participativos público-privados que involucren a todos: grandes, pequeñas y medianas empresas, Administraciones Públicas, universidades y sociedad en su conjunto.

A juicio del consejo, otro aspecto relevante es el de acelerar la coordinación entre las diferentes administraciones públicas para asegurar la llegada de fondos, de manera que se puedan acelerar la publicación de sus convocatorias y facilitar que las mismas se adapten a las características económicas y sociales de cada región.

Preocupación entre los empresarios de la comunidad

A. B.

VALLADOLID. La alerta lanzada por el CES no es ajena a las preocupaciones de los empresarios de la comunidad, presentes en el consejo a través de CEOE Castilla y León. Su presidente, Santiago Aparicio, advierte el mes pasado sobre la necesidad de que «los fondos de recuperación europeos lleguen a todas las empresas, grandes y medianas, pero también a pequeñas y autónomas». «Se generaron muchas expectativas, pero lo cierto que estos fondos no están siendo accesibles para las empresas castellanas y leonesas», lamentaba el pasado 21 de julio en la entrega de premios anuales de la organización.

Para la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel, la 'materialización' del dinero europeo debe servir para poner en marcha proyectos tan necesarios para toda la comunidad como el futuro Parque Logístico de Proveedores. «Hemos solicitado reiteradamente a todas las administraciones que den un impulso a este proyecto, porque esta estación intermodal se sitúa en un eje fundamental: el Corredor Atlántico de Mercancías, infraestructura vital para el Oeste de la Península, y donde los fondos europeos y la colaboración público-privada, van a ser determinantes», sostiene.

«Mejor fiscalidad para los pueblos que generan energías renovables

A. B.

VALLADOLID. El CES insiste en su informe de situación en que sigue siendo preciso fortalecer la industria, una «necesidad estratégica y una condición indispensable para lograr un crecimiento económico sostenido y generador de empleo». La industria es un sector clave en el conjunto de la actividad regional por su

aportación al progreso tecnológico y su efecto tractor, vía demanda, sobre los servicios de mercado, entre otros factores.

Consideran los agentes sociales que «existen dos objetivos industriales especialmente vinculados a las zonas rurales: desarrollar acciones cooperativas y potenciar la localización de la industria». En particular, destaca en CES, el sector agroalimen-

tario requiere de un incremento en los esfuerzos para que en el medio rural se alcance una prestación de servicios de calidad, lo que redundará en el fomento del empleo y la inversión y contribuirá a la cohesión territorial, social y económica.

El CES considera urgente abrir un proceso de diálogo eficaz sobre la política energética que afecte a las comunidades que como Castilla y León son excedentarias en producción eléctrica. Cabe recordar que la producción eléctrica de la región, especialmente de carácter renovable, es muy superior a sus necesidades y que

esto genera un excedente, que aporta al conjunto nacional sin recibir a cambio contraprestación alguna.

Por ello, señalan, «entendemos que se debe impulsar el debate sobre este hecho y reclamar la posible implantación de un modelo fiscal diferenciado, empujando por una fiscalidad favorable para personas y empresas que se establezcan en el medio rural, donde se genera una buena parte de esa energía. Esta medida actuaría como un factor de discriminación positiva para afrontar el reto demográfico y la despoblación».

Los contratos en hostelería y cultura se dispararon más del 70% en 2021

La eliminación de las restricciones por la pandemia devolvió a Valladolid a cifras prepandémicas con 8.000 parados menos

ÁLVARO MUÑOZ

VALLADOLID. Una estadística en forma de U. La hostelería y la cultura muestran signos de recuperación después de un 2020 marcado por la escasa actividad por la pandemia. Casi nula. En 2021, la instantánea cambió considerablemente en Valladolid, a pesar de que la covid seguía dando sus coletazos en continuas olas, y mostró una recuperación visible en las cifras. Así lo pone de manifiesto el informe del mercado del trabajo de Valladolid de 2021, elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

A la cabeza de esa mejora se encuentran los contratos en los sectores de la hostelería y la cultura (actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento), con aumento del 76,37% (28.604 contratos más) y 71,70% (7.170 contratos más) en relación a 2020, respectivamente. Y es que en 2021 se registraron 210.150 contratos de trabajo, un 21,53% más que el año anterior y que se repartieron entre 77.389 trabajadores.

La mayor parte de los contratos fueron para trabajar en el sector servicios, aunque en todos los sectores aumentó la contratación. La sección económica que más firmas acumuló fue la industria manufacturera. La siguen hostelería, comercio al por mayor y menor, actividades administrativas y agricultura.

Asimismo, el volumen anual de contratos realizados a hombres fue mayor que el realizado

a mujeres, siendo la edad promedio del contratado de 37 años, ligeramente mayor entre las mujeres. Una mejora que se palpa también en los demandantes de empleo. Precisamente, al final de 2021, en la provincia vallisoletana, 28.097 personas estaban inscritas como demandantes de empleo en el SEPE, lo que suponía casi 8.000 menos que el año anterior. Una disminución, en sexos, que supuso una merma del 22,94% entre los hombres y un 21,24% entre las mujeres.

Asimismo, el número de parados disminuyó en todos los tramos de edad, y en mayor cuantía entre los mayores de 55 años; y en valor relativo, un 41,76% menos entre los menores de 24 años. De esta forma, el 34,04% de los parados de Valladolid lleva menos de tres meses en paro y el 46,35% más de doce meses en esta situación (39,38% de los hombres y 51,33% de las muje-



Un camarero atiende la mesa de un establecimiento hostelero. ANTONIO TANABRO

res). A pesar de esa mejora que refleja el SEPE en este informe, aún queda un amplio porcentaje para llegar a cifras de 2007. Desde ese año, el paro registrado se ha incrementado un 13,08%. Hasta 2019 el aumento fue de un 17,21% y en 2020, debido a las restricciones hacia la actividad económica por la covid, un 27,88% más respecto al 2007.

Crecimiento de hasta un 3%

Y todo esto en un ambiente de incertidumbre con optimismo. La previsión de crecimiento para Castilla y León se estimaba en 2021 que sería de un 5% cuando

según datos provisionales se ha alcanzado el 5,5%. Para el año 2022 se prevé un nivel de crecimiento semejante aun con una situación incierta, variante del virus, incremento de precios y costes y problemas de suministros industriales. No obstante, la intensificación de los riesgos derivados de una alta inflación y de la situación bélica en parte de Europa contiene el crecimiento esperado acercándolo a tasas más parecidas a las anteriores a 2019.

Por su parte, en 2022 continuará la creación de empleo, y se cree que de mayor calidad tras la reforma laboral y apoyada en la mayor inversión en bienes de equipo, la

recuperación del turismo, el dinamismo de actividades relacionadas con el ocio y el impulso a las inversiones y reformas del Plan de Recuperación.

Con esos ingredientes se estima que el crecimiento de la economía de Castilla y León alcance, en datos de PIB, entre un 2,5 y un 3,0% este año. En cuanto al empleo, el mayor peso de la industria en la comunidad ha permitido mantener el empleo durante la crisis, pero la menor dependencia del turismo y la incidencia relacionada con el suministro industrial y la automoción frenan una mayor creación de empleo, según refleja el informe del SEPE.

La edad media de la población en la provincia sigue al alza y se sitúa en los 47 años

Á. M.

VALLADOLID. Si algo no ha cambiado en la provincia es su población envejecida con o sin pandemia. La pirámide de población de Valladolid sigue manteniendo un perfil de avanzada edad, pues el 23,55% es mayor de 64 años (23,35% el año anterior), con escasa capacidad de relevo al ser solo el 13,72% menor de 16 años. En cambio, más envejecido está el global de la comunidad. El 25,74% es mayor de 64 años por un 12,46% menor de 16. En el último decenio, Valladolid perdió

el 2,90% de la población. A ello contribuyó el menor peso del total de extranjeros residentes (se redujo su volumen en más de cinco mil personas, aunque este último año ha recuperado más de mil quinientos extranjeros. El conjunto de Castilla y León disminuyó un 6,85% y en España aumentó un 0,41%). Precisamente, entre las veinte provincias más envejecidas de España están las nueve de la comunidad y Valladolid ocupa el puesto decimotercero.

Según las cifras de población del padrón municipal a 1 de ene-

ro de 2021, el número de personas empadronadas en la provincia de Valladolid ascendía a 519.361, 1.288 menos que el año anterior. Esta cantidad representa el 1,10% de la población española y el 21,79% de la de Castilla y León. Durante el año 2020, la población en Valladolid disminuyó un 0,25%. En el conjunto de Castilla y León descendió el 0,49% y en España aumentó un 0,14%.

La distribución por sexo y edad muestra una pirámide regresiva: la población se contrae, está sufriendo un proceso de envejecimiento (alto porcentaje de ma-

yores) y base más estrecha (tasa de natalidad baja) en las edades más jóvenes. Por sexo, residen 267.109 mujeres frente a 253.540 hombres, mientras que el grupo de 0-4 años ha disminuido un 4,45% y el de mayores de 65 años han crecido el 1,86%.

Con estos datos, la edad media sigue creciendo en la provincia hasta alcanzar los 46,4 años entre los hombres y los 47,7 años entre las mujeres. Vallisoletanos que se concentran principalmente en la capital con 297.775 habitantes, seguidos de dos municipios del alfoz como Laguna de Duero (22.633 habitantes) y Arroyo de la Encarnación (20.716 habitantes). En el otro lado de la balanza poblacional, el 31% de los municipios de la provincia no sobrepasa los 200 habitantes.

Los hoteles recuperan en fiestas los niveles prepandemia con los fines de semana llenos

● Los hosteleros de la ciudad esperan igualar ediciones pasadas y convocar a un millón de comensales, a 100.000 por jornada / Entre semana la ocupación hotelera se prevé más tranquila

PALOMA REVILLA VALLADOLID

A tan solo unos días de que comience la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, Valladolid empieza a recibir clientes en sus hoteles. Desde el 2 y hasta el 11 de septiembre, la ciudad tendrá «las mejores fiestas de España», según dijo el alcalde Óscar Puente. Habrá «diez días de fiestas y conciertos gratuitos de altísimo nivel. En el país hay fiestas potentes, pero no hay ningún caso como este», destacó el mismo.

«Los fines de semana hay una buena ocupación. Seguramente, los dos sábados, sobre todo el último, se roce el lleno en la ciudad», indica Francisco Posada, el presidente de la Asociación de Hoteles de Valladolid. Además, añade, «Entre semana será más tranquila, con ocupaciones parecidas a las de 2019».

Desde la Asociación de Hoteles se muestran positivos en cuanto al volumen de ocupación durante los próximos días. Aunque, en la actualidad, hay seis hoteles que se encuentran cerrados, lo que supone que haya 400 habitaciones menos disponibles.

Por otro lado, desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, esperan que haya gran afluencia pues «las casetas dan animación». Los hosteleros desean convocar a un millón de comensales, a 100.000 por jornada, como ya ocurrió en ediciones pasadas. Durante el verano, la situación ha sido bastante irregular, debido a que al principio del mes de julio, se produjo una gran bajada de clientes, a lo que le siguió un agosto con una clientela discontinua. «Ha habido picos de consumo», señala María José de la Calle, la gerente de la asociación.

Conciertos como los de Miguel Poveda, The Hives o Jason Derulo, atraerán a numerosas personas que deseen disfrutar de un ambiente festivo y música antes de que vuelva a comenzar el curso escolar.

Las pernataciones hoteleras, en junio, repuntaron en la ciudad con un 29,8%, es decir, un total de 118.000. Con esta cifra se situó en el tercer lugar de la tabla de provincias de la Comunidad, según los últimos datos de coyuntura hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE). En julio, el INE revela que el grado de ocupación por plazas fue del 55,65%. Los fines de semana, ese indicador se quedó en el 38%.

Durante todo el verano se han



Una pareja de turistas registrándose en el Hotel Melia de cuatro estrellas en la Acera de Recoletos de Valladolid. E.M.

registrado cifras inferiores a las de 2019, según expone Francisco Posada. Pero la situación de este inicio de septiembre es favorable, a pesar de que «están reservando a última hora. Quizás se vayan animando las ventas. Hay que esperar», declaran desde la Asociación de Hoteles de Valladolid.

La crisis de los precios afecta a los hoteles en gran medida. «Hay que tener en cuenta que los consumos energéticos influyen. Se multiplica por 3 la factura. Un hotel con una capacidad media de 80 habitaciones pagaba 7.000 euros, y ahora 25.000 euros», manifiesta

Posada. Aún así, informa, «no podemos repercutir esta subida en el cliente porque estaríamos con precios desorbitados. Esto afecta a la cuenta del hotel».

En cuanto a la hostelería, María José, la gerente de la asociación señala, «esperemos que la gente salga a la calle y la hostelería recupere las fiestas de la Virgen de San Lorenzo». A su vez expone, «en principio, prevemos que la gente tiene ganas de asistir a las fiestas como hacía tiempo puesto que, desde 2019 es el primer año con casetas, de la Feria de Día, como lo conocemos».

La crisis de los precios también afecta a la hostelería, pero «el hostelero no va a repercutirlo en los precios», revela María José de la Calle. De las 97 que participaron en el 2019, se pasará a las 72 este año.

María José informa, «al hostelero no le ha quedado más remedio que asumir el incremento de precios debido a la subida de suministros y productos básicos. Ha habido una subida media de un 25%. La luz en muchos casos se ha triplicado». También expone, «en muchos establecimientos se ha pagado más de luz que de renta».

La reducción del número de casetas se debe a que el hostelero «las casetas son caras. Está el montaje, las instalaciones de luz, el agua, las cámaras y el alquiler de la maquinaria. En muchos casos el gasto es de 8000 euros sin haberse iniciado la venta de los productos», revela la gerente de la asociación. «Ha habido mucha incertidumbre de cómo iban a ser las fiestas. Muchos establecimientos tienen que poner capital en la calle antes y han decidido no ponerlo. Han hecho números y han visto que no merecía la pena la inversión», aclara María José.

Valladolid y Burgos acaparan el 40% de la energía que consume la Comunidad

● León es la provincia con mayor consumo doméstico de electricidad y encabeza el de carburantes con cerca de medio millón de toneladas, aunque Palencia es donde más ha aumentado la demanda, un 30%

RICARDO GARCÍA VALLADOLID

La energía es uno de los suministros que ha cobrado en los últimos meses especial relevancia como consecuencia del incremento de los precios que ha sufrido. Lo que antes era un gasto más en hogares y empresas, ahora se mira con lupa tratando de recortar cada vatio posible. En el conjunto de Castilla y León, sin embargo, el consumo energético es muy heterogéneo, hasta el punto de que las provincias de Valladolid y Burgos acaparan en 2021 algo más del 40% de los casi doce millones de megavatio/hora utilizados de electricidad, casi el 50% de los 21 millones y medio de gas natural y un 30% de los 2,7 millones de toneladas de carburantes.

Esta circunstancia, no obstante, tiene una explicación sencilla. Se trata de dos provincias con un importante peso poblacional e industrial, lo que hace que requieran de un mayor suministro que otros territorios donde hay menos habitantes y empresas de las conocidas como electrointensivas, es decir, las que utilizan la electricidad como principal suministro para su funcionamiento, pero que debido a su tamaño también requieren de otros.

Según los datos ofrecidos por Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) en su resumen anual de 2021, la provincia vallisoletana fue la que más electricidad consumió a lo largo del pasado año. Cerró el ejercicio con 2.430.787 megavatio/hora gastados, casi cuatro veces más que provincias como Ávila, Soria y Zamora. Esto supone, a su vez, el 20,41% del total utilizado en la Comunidad, 11.910.103 megavatio/hora.

Por su parte, Burgos se movió en cifras muy similares, ya que requirió de 2.401.670 megavatio/hora, un 20,16% del total. Mientras que en el caso de Valladolid este consumo hace pensar

CONSUMO DE ENERGÍA EN CASTILLA Y LEÓN

● PRODUCCIÓN BRUTA Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

	PRODUCCIÓN bruta de energía eléctrica (MWh)	Porcentaje respecto del total regional	CONSUMO de energía eléctrica (MWh)	Porcentaje respecto del total regional
Ávila	840.449	3,10	581.837	4,89
Burgos	5.682.741	20,95	2.401.670	20,16
León	1.986.474	7,32	1.943.366	16,32
Palencia	2.501.630	9,22	986.326	8,28
Salamanca	6.332.391	23,34	1.357.902	11,40
Segovia	467.096	1,72	875.088	7,35
Soria	2.931.237	10,81	656.732	5,51
Valladolid	3.004.153	11,07	2.430.787	20,41
Zamora	3.380.016	12,46	676.396	5,68
Total regional	27.126.387	100,00	11.910.103	100,00
Total nacional	270.370.527	-	241.905.000	-
% Castilla y León	10,03%	-	4,92%	-

● CONSUMO DE GASOLINA Y GASOLEO (t)

	Gasolina	Gasóleo	Fuelóleo	TOTAL	Porcentaje respecto del total regional
Ávila	19.770	146.312	504	166.587	6,03
Burgos	45.002	349.357	413	394.772	14,30
León	53.521	436.472	1.338	491.331	17,80
Palencia	18.996	223.229	6.610	248.836	9,01
Salamanca	34.491	353.767	390	388.648	14,08
Segovia	22.732	197.999	337	221.068	8,01
Soria	11.132	126.879	13	138.024	5,00
Valladolid	54.524	364.911	1.360	420.794	15,24
Zamora	22.952	266.621	811	290.384	10,52
Total regional	283.122	2.465.547	11.775	2.760.444	100,00
Total nacional	5.243.120	27.523.670	1.344.334	34.111.124	-
% Castilla y León	5,40%	8,96%	0,88%	8,09%	-

● CONSUMO DE GAS NATURAL (MWh PCS)

	Liberalizado		TOTAL	Porcentaje respecto del total regional
	Uso doméstico	Industrial y servicios		
Ávila	199.610	178.936	378.546	1,76
Burgos	1.052.571	4.675.540	5.728.111	26,59
León	857.061	1.582.390	2.439.452	11,33
Palencia	392.340	1.677.812	2.070.152	9,61
Salamanca	730.781	1.527.925	2.258.706	10,49
Segovia	263.962	1.041.272	1.305.234	6,06
Soria	177.577	1.565.345	1.742.922	8,09
Valladolid	1.591.350	3.350.089	4.941.439	22,94
Zamora	283.425	392.236	675.660	3,14
Total regional	5.548.677	15.991.544	21.540.221	100,00
Total nacional	376.370.000	376.370.000	376.370.000	-
% Castilla y León	5,72%	-	-	-

FUENTE: Junta de Castilla y León.

EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN

en una mayor cifra de población y en industrias muy potentes, por ejemplo las automovilísticas, el consumo de Burgos apunta más a esta segunda circunstancia, ya que frente a un tejido industrial de peso, cuenta con aproximadamente 165.000 habitantes menos que en el caso vallisoletano.

De hecho, esto se confirma de acuerdo con los datos desglosados que ofrece el EREN en base al uso que se le da a esa energía consumida. En el uso doméstico, Valladolid gastó casi 150.000 megavatio/hora más que Burgos, mientras que en el caso del uso industrial y de servicios, la provincia burgalesa aventajó a la vallisoletana en poco más de 120.000 megavatio/hora.

Continuando con este uso doméstico, Soria fue la provincia que menor consumo registró, con apenas 140.616 megavatio/hora. Le siguió Palencia, con 140.616, lo que certifica que, salvo excepciones como la de León, este dato tiene relación directa con la cifra total de habitantes.

Ya por encima de los 200.000 megavatio/hora consumidos se situó Ávila, con 219.536. Por delante, aunque con un margen escaso, Zamora gastó el año pasado 225.694 kilovatios para uso doméstico; seguida de Segovia con 228.680 y de Salamanca, con 432.889 de los cerca de tres millones que destinó Castilla y León para este fin.

Atendiendo ahora al uso industrial, ese en el que Burgos lidera el consumo de los 8.822.758 megavatio/hora del conjunto autonómico, esta provincia, Valladolid y León son las únicas que superan el millón. Esta última requirió de 1.322.409 megavatio/hora en 2021, por delante de los 923.657 empleados por la industria y los servicios salmantinos. En Palencia la cifra fue de 803.790, dato motivado previsiblemente por la fábrica de Renault en Villamuriel

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

VALLADOLID
VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

de Cerrato y otras del sector alimentario. Por su parte, Segovia consumió 603.350 megavatios/hora, frente a los 514.402 de Soria, los 443.996 de Zamora o los 358.925 de Ávila.

Pese a todo, llama también la atención que no es Valladolid la provincia que más electricidad consumió en 2021 en el uso doméstico, a pesar de ser la que más habitantes tiene de la Comunidad. Ese puesto lo ocupa León, que con 566.935 megavatios hora la adelantó por más de tres mil.

De hecho, la provincia leonesa se sitúa la tercera de la Comunidad en consumo eléctrico, con algo más del 16% del total. Ocurre lo mismo con el gas natural, puesto que en León se consumieron a lo largo de 2021 casi dos millones y medio de megavatios/hora (una medida que también se puede aplicar a este combustible para equipararlo con la electricidad) y que suponen más del 11% del consumo regional.

No obstante, si León destaca en algún consumo es en el de combustibles, ya que la provincia supera holgadamente al resto con casi medio millón de toneladas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos gastado durante el pasado año, lo que supone cerca del 18% del total regional.

Pero volviendo a la demanda de gas natural donde Burgos (5,7 millones de megavatios/hora), Valladolid (4,9 millones) y León (2,4 millones) ocupan el podio de las provincias más «consumidoras», el cuarto puesto recae en Salamanca, que con 2.258.000 megavatios/hora, el 10,5% del consumo regional, no se aleja demasiado del territorio leonés.

La siguiente en la lista es Palencia, con poco más de dos millones de megavatios/hora que representan cerca del 10% del total. Mientras tanto, el resto de provincias se quedaron en 2021 por debajo de los dos millones de megavatios/hora. Así, Soria consumió 1,7 millones de megavatios/hora; Segovia, 1,3 millones; Zamora, 675.000 megavatios/hora; y Ávila, 378.000.

Por otro lado, y con respecto a los carburantes, resulta llamativo el aumento en el consumo que registró Palencia, de más de un 30%, si el mayor gasto tuvo lugar en León, con casi medio millón de toneladas; y en Valladolid, que en 2021 alcanzó las 420.000. Burgos ocupó el tercer lugar, con 394.000 toneladas de carburantes, tan solo seis mil más que las 388.000 requeridas por Salamanca. Menor consumo fue el que se registró en Zamora, con 290.000 toneladas, y seguida de Palencia (248.000), Segovia (221.000), Ávila (166.000) y Soria (138.000).

Por otro lado, también cabe

destacar que Castilla y León es una de las grandes potencias nacionales en producción de energía eléctrica. No en vano, la Comunidad se sitúa entre las tres del país que más generan, aportando nada menos que el 10% del total. A lo largo del año 2021 generó más de 27 millones de megavatios/hora, una cifra que solo superaron Cataluña (casi 40 millones) y Andalucía (29,5 millones). Por otra parte, la región también puede calificarse como exportadora de esta energía, ya que solo consume la mitad de la generada y envía el sobrante a otros territorios.

En este caso son datos del Sistema Eléctrico Español, que sitúan la producción de la Comunidad durante 2021 en los 27.016.000 de megavatios/hora, casi un 98% del consumo en el mismo periodo. A su vez, y dentro de ese liderazgo en producción energética que Castilla y León comparte con Cataluña y Andalucía, destaca la región porque en ninguno de estos dos casos esa generación es suficiente para cubrir la demanda.

En este sentido hay que destacar también que la región aporta buena parte de la energía que se genera en centrales hidroeléctricas en España, con nada menos que el 28% del total. Algo similar ocurre con la eólica, donde el 22% sale de territorio castellano y leonés.

Volviendo al informe del EREN, cuya cifra de producción eléctrica difiere levemente del que recoge el organismo estatal (27.126.387 MW/h frente a 27.016.000), también se profundiza en la generación por provincias. La que se sitúa aquí en cabeza es Salamanca, con 6.332.391 megavatios/hora, y con cierta ventaja sobre Burgos y sus 5.682.741 megavatios.

Más reducidas son las cifras que arrojan Zamora (3.380.016 MW/h) y Valladolid (3.004.153 MW/h), que a su vez se sitúan por delante de Soria (2.931.237 MW/h), Palencia (5.501.830 MW/h), León (1.986.474 MW/h), Ávila (840.449 MW/h) y Segovia (467.096 MW/h).

En cuanto a las vías de producción de esta electricidad, en la Comunidad no se contabiliza un solo vatio de origen nuclear. De las centrales térmicas, que incluyen las de carbón, fuel y gas, de ciclo combinado, cogeneración, térmica renovable y de otro tipo, procedieron en 2021 algo menos de tres millones de megavatios/hora, ello a pesar de las que se han desmantelado recientemente.

De las centrales hidroeléctricas procedieron más de nueve millones de kilovatios, que a su vez se quedan lejos de las trece y medio producidos en parques eólicos. Finalmente, de las instalaciones de placas solares procedió algo menos de un millón y medio de megavatios/hora.

Uno de cada 3 universitarios procede de otra comunidad

Casi 27.000 de los 85.000 matriculados en Castilla y León residen en otra región / La autonomía va segunda en tasa de escolarización universitaria

S. G. C. VALLADOLID

Un total de 26.983 de los 85.122 matriculados en las universidades de Castilla y León en el último curso procede de otra comunidad autónoma, lo que supone una tasa de movilidad del 31,7%, el doble de la media nacional. Los centros de las nueve provincias atraen así a un gran número de estudiantes del territorio nacional, según los datos del último informe *Datos y Cifras del Sistema Universitario Español* del Ministerio de Universidades.

Uno de los datos más llamativos del informe es que el grado de escolarización universitaria de Castilla y León —es decir, el número de estudiantes de entre 18 y 24 años en enseñanzas de Grado, primer y segundo ciclo y máster dividida en tre la población total de esa misma edad—, es la segunda más alta de España, con un 40,4%. Supone 8,4 puntos más que la media nacional, situada en el 32%. Solo la supera la Comunidad de Madrid, con un 46,4%. El tercer puesto lo comparten, ya a distancia, Navarra y País Vasco, con un 33,9%.

Por otro lado, es de destacar que tres de cada cuatro castellanos y leoneses que aprueban la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Ebau) optan por quedarse en la Comunidad. La tasa alcanza el 75,4%, que en el número total de matriculas del último curso supone un total de 9.493 estudiantes. Un 13,3% opta por acudir a Madrid, que acaparó la mayor parte de los universitarios salidos de Castilla y León.

El informe, recogido por Ical, señala que las universidades que prestan una formación presencial en Castilla y León son las que atraen el mayor porcentaje de alumnos con residencia habitual en otras comunidades, al

Movilidad nacional de los universitarios		
	Matriculados en grado y ciclos universidades presenciales (curso 2019-2020)	Tasa movilidad nacional (cambio CCAA)
■ Castilla y León	64.938	31,7
■ Navarra	14.940	31,2
■ La Rioja	3.526	30,5
■ Madrid	234.923	30,3
■ Murcia	42.731	21,5
■ Castilla-La Mancha	25.514	19,8
■ Aragón	29.056	17,3
■ Cantabria	10.362	15,6
■ Comunidad Valenciana	120.275	14,4
■ País Vasco	49.835	11,8
■ Cataluña	174.165	10,5
■ Extremadura	17.165	10,1
■ Asturias	17.381	9,7
■ Andalucía	201.588	8,4
■ Galicia	49.803	6,2
■ Baleares	12.066	3,6
■ Canarias	33.980	2,7
■ Ceuta	1.298	40,2
■ Melilla	1.632	38,9
■ Total	1.105.178	17,5

FUENTE: Ministerio de Universidades

ICAL

situarse en el 31,7%, mientras la tasa de movilidad nacional está en el 17,5%. La Comunidad está por encima de Navarra (31,2%), La Rioja (30,5%) y Madrid (30,3%).

Según el informe, el 16,3% de los riojanos elige campus de Castilla y León para matricularse, seguido del 12,1% de los cántabros y el 12% de los extremeños. A continuación, aparecen el 7,5% de los procedentes de Asturias; el 5% de Navarra; el 3% de Galicia; el 2,9% del País Vasco; el 2,3% de Castilla-La Mancha y el 1,8% de los que llegan de Canarias y el 1,6% de los estudiantes de Aragón. Frente a las comunidades que son atractivas

para estudiar un grado universitario, están los territorios que apenas despiertan el interés de los estudiantes como son Canarias (2,7%) y Baleares (3,6%), entre otros motivos por ser islas, seguidas de Galicia (6,2%), Andalucía (8,4%) y Asturias (9,7%).

Cataluña y Madrid lideran esta tabla ya que el 98,3% de los estudiantes catalanes y el 94,9% de los madrileños no cambian de autonomía al matricularse en una universidad de presencial. En el lado contrario, se encuentran los de Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura, donde ese porcentaje ronda el 50%, mientras que se reduce al 34,3% en La Rioja.

Impulso a la investigación con 14,4 millones para 119 proyectos

VALLADOLID
Las universidades y centros de investigación de Castilla y León recibirán un total de 14.394.281 euros para el desarrollo de 119 proyectos de generación de conocimiento durante los próximos entre tres y cuatro años. La mayor parte de los proyectos a los que la Agencia Española de Investigación concedió financiación pertenecen a las cuatro universidades públicas de la Comunidad, si bien también se aprobó la concesión de ayudas a la Universidad Pontificia de Salamanca, a la IE University de Segovia y a diversos centros que el

CSIC tiene repartidos en territorio castellano y leonés.

Así figura en la propuesta de resolución provisional del procedimiento de concesión de ayudas, convocado en 2021, a proyectos de generación de conocimiento, publicada el 23 de junio de este año y al que ha tenido acceso Ical. Se trata de una iniciativa enmarcada en el Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia perteneciente al Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el periodo 2021-2023. No obstante, las ayudas se prorrogarán

principalmente hasta el año 2024 y, en algunos casos, hasta 2025.

Las cuatro universidades públicas de Castilla y León son las que más cuantía percibirán de este programa. En total, 99 de los 119 proyectos aprobados por la Agencia Española de Investigación, el 83,2%, se encuentran enmarcados en facultades, centros e institutos de investigación de las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, mientras que la cuantía que recibirán las cuatro instituciones se eleva hasta los 10.947.112 millones de euros, el 76% del total.

Gallardo critica la presión que Hacienda ejerce sobre las empresas de Castilla y León

El vicepresidente de la Junta asegura que es el triple que en Madrid y alerta que esto «desincentiva la inversión en nuestro territorio»

R. G. VALLADOLID

La presión a la que Hacienda somete a las empresas de Castilla y León supone un lastre para la inversión en la Comunidad. Así lo entiende el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quien en una respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria defiende que «las empresas de Castilla y León sufren excesivas inspecciones fiscales por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria desde hace años».

Con estas palabras, el número dos del ejecutivo autonómico y líder de VOX en la Comunidad ha dado respuesta en las Cortes a la pregunta presentada por el PSOE acerca de unas declaraciones suyas en el desayuno de Nueva Economía Fórum, alegando que cada inspector de Hacienda debe supervisar de media en Castilla y León un resultado bruto de las sociedades mercantiles de 33 millones frente a los 109 de la Comuni-

dad de Madrid. En términos de cuota líquida impositiva (recaudación efectiva), la cifra a revisar de las empresas de la Comunidad es de 10,2 millones frente a los 16,7 millones de las madrileñas. Esto supone que la «presión de la inspección fiscal es el triple en Castilla y León que en la Comunidad de Madrid», según sostiene García-Gallardo, en su contestación consultada por Ical.

El vicepresidente de la Junta insiste en que «la consecuencia de estas diferencias entre comunidades autónomas es que las sociedades mercantiles en Castilla y León reciben inspecciones fiscales con una mayor frecuencia que no está justificada, lo que desincentiva la inversión empresarial en nuestro territorio».

Además, pone como ejemplo datos de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), que indican que un 30% de las empresas locales que han sido inspeccionadas por la

Hacienda Pública afirman haberse planteado su deslocalización hacia otras comunidades.

El dirigente de VOX resume que las «excesivas» inspecciones fiscales que «sufren» las empresas de Castilla y León suponen un «perjuicio para la creación y permanencia del tejido empresarial en la Comunidad». «El hecho en sí de estar sometidas a una inspección supone una carga adicional para las empresas, que, en caso de producirse con demasiada frecuencia, como ocurre en Castilla y León, constituye una carga excesiva y desincentiva la inversión empresarial», asevera en su argumentación.

«Es nuestro deber facilitar el mantenimiento y la instalación de proyectos empresariales en Castilla y León. Para ello, debemos limitar los factores negativos que supongan un desincentivo. Las excesivas inspecciones fiscales de la AETAT son uno de ellos», sentencia.

Ayudas de 14,4 M€ para 67 empresas de estaciones de servicio

VALLADOLID

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), ha concedido hasta la fecha 14,36 millones de euros a 67 empresas de distribución de combustible en la Comunidad, a través de sus estaciones de servicio, para que puedan adelantar la bonificación extraordinaria y temporal en el precio de los carburantes, lo que ha permitido «ayudar a un importante número de autónomos y micropymes, gran parte de ellos ubicados en el ámbito rural», informa Ical.

Esta línea de ayuda, que tiene como principal objetivo garantizar la liquidez de las empresas del sector, permite que la Junta adelante a través de Iberaval la bonificación de 20 céntimos por litro en el precio de los productos energéticos y aditivos establecida por el Gobierno y que «dificultaba la viabilidad de las pequeñas empresas del sector». Esta financiación se realiza en condiciones «muy ventajosas» para las empresas, ya que los costes derivados de la misma están bonificados por el ICE.

ECONOMÍA

PUNTO DE INFLEXIÓN (IX)

MUCHO MÁS DIGITALES Y TAMBIÉN SOSTENIBLES

Tras dos años de pandemia, el sector del comercio comienza una nueva etapa con tres puntos de inflexión, que, según los expertos, son los que perfilarán el futuro a corto y medio plazo del sector. Uno de ellos es la transformación del modelo operativo y del modelo de crecimiento, para poder encarar mejor las posibles crisis en la cadena de suministro. La tecnología y la digitalización también han cambiado las reglas del juego en el sector de consumo, según los expertos de McKinsey. La adopción digital y auge del 'e-commerce' «han moldeado a un nuevo perfil de consumidor, mucho más informado y experto, más sensible al precio, menos fiel a las marcas, más expectante a la rapidez y agilidad de entrega y buscando nuevas fórmulas de consumo».

Al mismo tiempo, las marcas han transformado sus fórmulas comerciales al incorporar el canal de 'e-commerce'. Durante la pandemia, por ejemplo, la digitalización de las empresas aceleró entre tres y cinco veces y, por ejemplo, las ventas de moda 'online' crecieron un 55% en 2020. El mercado de alimentación 'online' podría llegar a un 7% de la cuota total de ventas, según la consultora. La sostenibilidad es otra de las claves del crecimiento y transformación del sector de consumo en los próximos años, pues es un valor cada vez más demandado por los ciudadanos. Según una reciente investigación elaborada por McKinsey, la sostenibilidad se está convirtiendo en un diferenciador estratégico y también en una fuente de valor y crecimiento para unos mercados cada vez más complejos.

El comercio se prepara para un otoño con parón en el consumo

- Algunos sectores ya atisban algunas señales de agotamiento en la demanda por las malas perspectivas económicas de cara a septiembre
- Los españoles están volviendo a hábitos propios de épocas de crisis y los expertos advierten de que también podría haber una crisis de oferta

RAQUEL VILLAÉCLIA

El consumo en estos dos últimos años ha evolucionado como en una montaña rusa. Se frenó por la pandemia, sobre todo en los sectores más ligados a las restricciones, repuntó, se frenó por la guerra y ha vuelto a crecer estos últimos meses estivales. Tras un verano con el turismo a reboar, los precios por las nubes y unas perspectivas económicas inciertas, se prevé un otoño gris. No sólo eso, algunos expertos auguran una crisis de consumo que podría prolongarse y estropear la recuperación de los sectores que, tras dos años de pandemia, por fin estaban repuntando.

«Estamos ante el otoño más oscuro desde hace bastante tiempo, probablemente desde 2008», vaticina Tomás Gómez, profesor de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). «La contracción del consumo en la pandemia tenía una causa: no podíamos gastar. Esta crisis tiene otro origen y una solución muy diferente», explica el docente, que recuerda que el crecimiento de España en el segundo trimestre del año «se ha basado en el consumo. Y la economía sólo saldrá adelante si hay consumos».

La inflación disparada, la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, unido a las malas expectativas económicas no dibujan un escenario que anime precisamente a comprar. «Este verano hemos visto un consumo mayor, pero ha sido un gasto más psicológico que económico. Es como si la gente quisiera darse un último homenaje. Pero a la vuelta de verano las previsiones no son buenas», dice.

«La pandemia ha tenido un impacto directo en las ventas del sector de consumo y en el comercio a nivel global. La crisis de la Covid ha provocado una continua disrupción e incertidumbre en las ventas minoristas, dejando tras de sí un aumento en la presión de los márgenes y un alza de costes a los que se han sumado factores como el aumento de precios de electricidad y transporte», resume Ignacio Marcos, Ignacio Marcos, so-

cio senior en McKinsey & Company.

Además de estas variables, «se observa un aumento del sentimiento negativo hacia la actual situación económica. Según nuestro análisis, un 67% de los consumidores españoles se muestra pesimista sobre la actual situación económica mientras que un 42% expresa también una visión negativa sobre la recuperación económica a futuro, con una creciente preocupación sobre la inflación, la guerra en Ucrania y el desempleo», explica María Miralles, socia en McKinsey & Company.

Como incide Tomás Gómez, «la cruda realidad es que con la subida de precios perdemos poder adquisitivo y eso se traduce en menor consumo». «La subida de tipos de interés es la única solución para controlar la inflación, pero entonces las empresas se lo pensarán más a la hora de hacer una inversión y las familias pagarán más por su hipoteca, lo que hará que tengan aún menos dinero para gastar en otras cosas», dice.

ECONOMÍA DE GUERRA

La preocupación de los consumidores por el alza de los precios «deriva en un ajuste de gasto en productos esenciales y lo estamos viendo desde ya con productos de cesta de consumo diaria y alimentación, pues los consumidores están optando por productos y marcas de menor precio. Por ejemplo, esto provoca que alguno de los productos considerados más premium está teniendo crisis de demanda», explica Miralles.

Carlos Moreno-Figueroa, vicepresidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), que representa al pequeño comercio, también percibe señales de agotamiento en la demanda. «Hasta ahora 2022 estaba siendo positivo, la mayoría de los sectores se había recuperado de la pandemia, pero ahora vemos un cierto agotamiento. Antes había gente que compraba productos sin mirar el precio. Ahora ya se no está comprando con tanta alegría. El ticket medio está bajando, a pesar del incremento de precios. La subida de costes, tanto energéticos, logísticos, como



de producto y proveedores, están desmadrados. Esto ha tenido una repercusión en el consumo», explica.

Sectores muy penalizados por la pandemia, como la hostelería o el turismo, podrían volver a sufrir. En época de crisis tendemos a trasladar parte del consumo que hacemos fuera de casa al hogar, dejamos de salir a cenar fuera para hacerlo en casa, por ejemplo. Por eso, «habrá un descenso en las partidas importantes de consumo. Se quedarán los productos de primera necesidad. El paro será el elemento clave. España es muy sensible a los cambios en el mercado laboral. La expectativa de que el paro se incremente afectará profundamente al consumo», dice Gómez.

Según el análisis de McKinsey, un 39% de los consumidores confiesa haber ajustado su estilo de vida debido a la subida de los precios. «Los consumidores, sobre



Un camarero y sus clientes en la plaza de Santo Domingo de Madrid. JAVIER BARBANCHO

RESTRICCIÓN EN LA CESTA DEL SÚPER

La contención en el gasto ya se percibe a la hora de llenar la cesta de la compra en los supermercados. Las ventas de alimentación siguen al alza pero por la subida de precios, mientras que si se perciben cambios, como un mayor consumo de marcas blancas, que en alimentación ya son la mitad de las compras, y un descenso en productos de alimentación básicos del 8%.

todo en los hogares con menores ingresos, han manifestado una sensibilidad al precio mucho mayor, siendo muchos más los que declaran su intención (incluso antes de la crisis actual) de cambiar a productos más baratos, en comparación con los datos de 2021», dice Miralles.

CRISIS DE OFERTA

A las malas perspectivas económicas y la guerra hay que añadir algunos problemas heredados de la pandemia que podrían complicar más aún el escenario. «El modelo de crecimiento tradicional afronta una revisión de sus cimientos debido a los desafíos relacionados con la fragilidad de las cadenas de suministro [marcadas por la pandemia y que ahora afrontan la situación desencadenada por la guerra de Ucrania]», señala Ignacio Marcos.

La crisis de demanda en el consumo podría agravarse por tanto con una cri-

sis de oferta, con problemas puntuales de escasez de producto. Lo vimos el pasado mes de diciembre con la crisis de contenedores, cuando empezaron a faltar materiales básicos, como aluminio, vidrio, cartón... Cuando estalló la guerra lo que faltaba en los supermercados era aceite de girasol, piensos para los animales... Este verano nos hemos encontrado con que no había hielo. Estamos aprendiendo a gestionar la escasez de una abundancia que nunca pensamos que nos iba a faltar.

«La presión sobre las cadenas de suministro globales, los crecientes costes y los atascos logísticos podrían tener, no sólo un impacto en los precios, sino a la vez minar la capacidad de la industria para entregar productos a los clientes. Las empresas deben repensar sus estrategias de abastecimiento», opina Marcos.

¿Cuánto puede durar esta crisis de con-

DATOS

-0,1%

Caida en las ventas minoristas. En junio las ventas al por menor en España bajaron un 0,1% y ya suman dos meses de descensos.

10,1

Descenso confianza del consumidor. El índice de confianza del consumidor cayó a doble dígito el pasado mes de junio, 10,1 puntos, su nivel más bajo desde que empezó la guerra en Ucrania.

6,8%

Gasto en gran consumo. Los españoles gastaron en junio en productos de gran consumo un 6,8% más que en el año precedente, sobre todo por la subida de precios.

sumo? «Si no se contiene la inflación, la guerra continúa y aumenta el paro, será dura», resume Gómez, de la Universidad de Valencia. Ignacio Marcos cree que «las empresas deben apostar por implementar mecanismos de compensación frente a la subida de los precios, buscando aumento del volumen de ventas y mejoras en la eficiencia interna».

Miralles coincide en que «para revertir el impacto negativo de estas tendencias los fabricantes podrían apostar por inversiones en términos de la oferta y cambios a nivel del modelo operativo. Mantener la inversión en la oferta de marcas blancas, ampliar el surtido de productos saludables y sostenibles cuya demanda va en aumento. Otra de las estrategias sería revisar el portfolio de productos y reforzar aún más sus productos de entrada y de primera calidad para atender esta brecha en las necesidades de los consumidores».

ECONOMÍA

DINERO FRESCO. La mayoría de los 35 datos de actividad, consumo o mercado laboral actualizados por el Ministerio de Economía están a la baja o en negativo

El 80% de los indicadores económicos apuntan frenazo



CARLOS SEGOVIA

El mismo día que el Gobierno de coalición aparentaba fortaleza al sacar adelante tres decretos en el Congreso incluido el de medidas de ahorro energético, el Ministerio de Economía actualizaba su «síntesis de indicadores económicos». Incluye 35 sobre la evolución económica, desde el Producto Interior Bruto y la inflación a datos adelantados de confianza económica o actividad industrial y retardados de paro y afiliaciones.

El 80% de ellos apuntan a un frenazo considerable de la economía ya en las próximas semanas que la Autoridad Fiscal predice que incluso se traducirá no en crecimiento cero, sino negativo como publicó este diario. Tiene su simbolismo que la vicepresidenta económica, **Nadia Calviño**, visitara al día siguiente la llamada Cámara Oscura de la Torre Gavira en Cádiz, en el marco de sus vacaciones al sur del país. Allí en la penumbra de la sala del edificio gaditano, pudo disfrutar por un instante de una realidad alternativa gracias al efecto óptico de la instalación.

La economía será un tema central en las próximas elecciones y nada

cohesiona más a la llamada mayoría de la investidura que el riesgo de perder el poder. ¿Para qué dejar ya solo a **Pedro Sánchez** forzando elecciones anticipadas, si la perspectiva, con esta situación económica, es de pérdida de votos para todos los que le están acompañando en este declive económico? Su análisis es que mejor alargar lo que puede terminar.

El argumento de que el actual Gobierno de coalición «es el que protege a la gente» lo trituro el pasado sábado en polémicas declaraciones en Metz el ministro de Economía de Francia, el liberal **Bruno Le Maire**: «Miren las facturas de la electricidad en España, ha crecido más de un 60%, mientras que en Francia lo han hecho un 4%. (...) Nosotros hemos tomado las buenas decisiones».

Francia, con una inflación del 6,8%, se mantuvo en julio como el mejor de la Eurozona. La media está en el 8,9 y España, con un 10,7%, es la única gran economía por encima de la media. Pero el IPC no es el único indicador que va mal, desgraciadamente, en la síntesis del Ministerio de Economía que, además, irá empeorando. De momento, los índices de confianza y producción en la construcción se encuentran en negativo, así como las matriculaciones de automóviles y vehículos de carga o la disponibilidad de bienes de equipo. El comercio al por menor experi-



La vicepresidenta económica **Nadia Calviño**, en el pregón de Betanzos, este mes de agosto. EFE

Todos los indicadores de confianza se encuentran a la baja

Calviño espera que la inflación se «ralentice» en septiembre

menta también decrecimiento, así como el consumo de energía ya semanas antes de que el Gobierno aprobara el decreto de ahorro energético, según el documento del Ministerio de Economía.

El saldo comercial va a peor y también se vienen desacelerando las afiliaciones a la Seguridad Social. Se salvan por ahora el paro registrado y, de los indicadores de actividad, la

producción industrial –si se incluye la energía– pero queda por ver la pérdida de empleo de agosto.

A eso hay que añadir el euribor y un encarecimiento general de la financiación. La prima de riesgo de España se ha instalado en agosto al alza en los 120 puntos básicos, el doble que hace un año, y el mensaje que recibirá Sánchez este martes en Alemania por parte del Gobierno de **Olaf Scholz** no va a ser precisamente el de que puede relajarse con la deuda y el déficit.

En lo que se puede apuntar un tanto Sánchez es en el próximo Consejo Europeo extraordinario dedicado a la energía y es que se va abriendo cada vez más paso la necesidad de una reforma del sistema para que el gas no influya tanto en los precios, como él reclama. Pero mientras eso se plasma en algo, los mercados internacionales de futuros apuntan a precios elevados del gas durante muchos meses y la ilusión de que la inflación era un fenómeno temporal que bajaría a plomo en la segunda

mitad del año se esfuma.

¿Cómo lo ve Calviño? Por un lado, en su pregón del 14 de agosto en las fiestas de Betanzos, pidió «confianza y optimismo» y hasta dijo que «Galicia es un ejemplo brillante de la economía española», aunque sin mencionar a **Alberto Núñez Feijóo**. Después, en el *Diario de Cádiz* señaló que espera que el alza de los precios «empiece a ralentizarse a partir de septiembre». «Ralentizar» sería seguir subiendo precios, pero a menor ritmo. Es decir, un otoño e invierno duro y sin diálogo entre Sánchez y el líder de la oposición. Feijóo no ha apoyado Sánchez en medidas que toman otros países europeos, pero tampoco se instala en el «no es no» y respaldó, por ejemplo, el decreto de autónomos el jueves. «Si para limpiar su cargo de conciencia», le pidió el portavoz socialista, **Mercè Peirea**. La crispación no se ralentiza.

Siga a Carlos Segovia en Twitter: @carlossegovia_carlos.segovia@elmundo.es

Seis de cada diez entidades locales esconden sus contratos a la lupa del Tribunal de Cuentas

El 45% tampoco facilitan sus resultados anuales dentro del plazo legal e incluso el 29% incumplen esta obligación «de forma sistemática» desde 2018

J. A. BRAVO

MADRID. El sector público local lleva varios años aprobando el examen presupuestario anual con superávit o, como mucho, déficits reducidos. Pero esa buena labor tiene otra cara claramente negativa, dado que la ocultación de sus datos contables es una práctica extendida, tanto que ha sido objeto de críticas severas por el Tribunal de Cuentas (TCu).

El reproche más evidente, a la vez que recurrente, es la laxitud a la hora de cumplir sus obligaciones. De las 14.151 entidades locales existentes (ayuntamientos, diputaciones, cabildos, comarcas y mancomunidades), casi la mitad (el 45%) no rindieron su cuenta general –en su último informe analiza datos de 2020, el primer año de la pandemia de covid– al órgano fiscalizador dentro del plazo legal. De ellas, un 14% lo hicieron con medio año de retraso (al cierre de 2021) y del resto (un 31%) no se tienen noticias de que lo hayan llegado a hacer.

Pese a ese incumplimiento extendido, entre los auditores públicos existe el convencimiento de que no es un problema de tiempos sino de voluntades. De hecho, en su dictamen el TCu estima que dado el desarrollo de las nuevas tecnologías, los plazos legales de rendición de cuentas para las entidades locales «resultan excesivamente dilatados».

Para abundar en su tesis de que es más una cuestión de actitud, el tribunal destaca las grandes diferencias en los niveles de rendición de cuentas según la comunidad autónoma de origen. Así, mientras en Andalucía solo un 35% de las entidades locales presentan sus cuentas a tiempo, en la Comunidad Valenciana suponen el 97% y en Aragón, el 93%.

Grandes municipios señalados

Entre los ayuntamientos señalados por esa indolencia hay diez considerados grandes, al tener una población superior a los 100.000 habitantes. Se trata de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga, Marbella, Badalona (Barcelona), Las Palmas de Gran Canaria y Palma (Mallorca) –el mayor consistorio de los 111 que nunca han presentado sus balances en plazo–, junto a los madrileños de Getafe y Móstoles. A ellos se añaden

las diputaciones provinciales de Cuenca, Ávila, Zamora, Lérida y de nuevo Cádiz, además de buena parte de los cabildos insulares. Ninguno había presentado las cuentas de 2020 un año después de haberse cerrado éstas.

La situación empeora si se echa la vista atrás. Según resalta el órgano fiscalizador, «un número significativo de entidades locales no rinde sistemáticamente sus cuentas generales». Así, prácticamente el 29% (3.746 en total) tenían aún pendiente de remitir la información relativa a 2018, 2019 o 2020, o incluso en 567 casos de los tres ejercicios. En ese último año las entidades locales manejaron un presupuesto global de 63.550 millones de euros, de los que ejecutaron el 76%.

Donde se aprecia una especie de agujero negro en el cumpli-

miento de sus deberes legales es en lo relativo a la contratación pública. El 33% de las entidades locales remitieron a tiempo datos relativos a esos compromisos, mientras que un 31% lo hicieron fuera de plazo. Sin embargo, el 36% (5.122 ayuntamientos, diputaciones y cabildos) no dieron información al respecto. Si a eso le añadimos que entre las que sí mandaron sus comunicaciones 3.076 entidades afirmaron no haber celebrado ningún tipo de contrato, el nivel de incumplidores se dispara hasta el 57,9%, esto es, prácticamente seis de cada diez. Y es que desde 2019 la Ley de Contratos del Sector Público les obliga a dar esos datos con independencia de la cuantía del contrato, sea mayor o menor.

Porque los auditores públicos tienen claro que en todos los ca-

sos «la actividad del ejercicio requiere la celebración de algún tipo de contrato». Es decir, estiman que si los consistorios no les mandan esa información no es porque no dispongan de ella,

EXCESOS MUNICIPALES

1.478

millones de euros han quedado fuera de control porque no se enviaron sus expedientes.

3.076

entidades locales dicen no haber firmado contratos pese a que su actividad sí lo requiere.

sino porque la esconden a su lupa de control. La mayoría de los acuerdos firmados por las entidades son de servicios (el 42%), dado el tipo de competencias que tienen asumidas, seguidos de los suministros (29%) y las obras (23%).

Expedientes ocultados

En los contratos de mayor volumen (más de 600.000 euros en obras o concesiones, por encima de 450.000 en suministros y más de 150.000 en servicios), las entidades locales deben mandar al TCu los extractos de esos expedientes. Pero tras varias comprobaciones, los técnicos detectaron que se le habían ocultado 1.463 extractos por un importe total de 1.478 millones de euros. Frente a ello, si pudieron fiscalizar en mayor o menor medida 34.057 acuerdos contractuales por valor de 8.021 millones.

El panorama no mejora al analizar los convenios suscritos por los ayuntamientos y el resto de entidades locales: solo el 38% remitió la información correspondiente al Tribunal de Cuentas, de modo que 8.837 (el 62%) incumplieron su obligación legal. Un análisis posterior ha verificado que entre los datos no enviados faltan 353 expedientes por valor de 593 millones de euros. Además, un total de 16.906 expedientes –cuyo importe ascendía a 770 millones– fueron tramitados por el sector público local saltándose el trámite de fiscalización previo que es preceptivo.

Preocupada con esta situación, la presidenta del tribunal, Enriqueta Chicano, ha pedido varias veces al Parlamento y al Gobierno que se recorte la financiación estatal a los ayuntamientos que no les rindan cuentas o incluso lo hagan con mucho retraso. La alternativa de imponerles multas como prevé la ley no la consideran efectiva, porque sus reducidas cuantías (apenas 1.000 euros en el mayor de los casos) eliminan su carácter coercitivo.



Entrada principal de la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid. n. c.

Los auditores públicos reclaman una 'limpieza' de empresas locales

J. A. B.

MADRID. El Tribunal de Cuentas ha dado otro tirón de orejas a los ayuntamientos por la desorganización que aprecian sus técnicos en el sector público local empresarial y que, además, se viene arrastrando desde hace años. Tanto es así que en su último in-

forme advierte seriamente de que «la sostenibilidad» de las arcas municipales «se encuentra afectada por la existencia de entidades instrumentales que incurren sistemáticamente en pérdidas o se encuentran en situación de desequilibrio patrimonial».

Y ello, advierte el órgano fiscalizador, «implica la necesidad de

adopción de medidas encaminadas a su subsanación». Al cierre de 2020 (último ejercicio analizado), una de cada diez empresas municipales –había registradas un total de 806– se encontraba «en causa legal de disolución» (su patrimonio neto era inferior a la mitad del capital social) o bien «sin actividad», casi el doble en los consistorios con menos de 5.000 habitantes. En el caso de 29 de esas sociedades públicas, llevaban más de cinco años en quiebra técnica.

Asimismo, el 30% de las em-

presas públicas locales (243 en concreto) cerraron el último ejercicio con pérdidas y, de ellas, un tercio también terminaron 2019 con resultados negativos. A ese panorama complicado se une el hecho de que las sociedades municipales (incluidas diputaciones y cabildos) soportaban un endeudamiento de 5.956 millones de euros, de los que el 42% eran exigibles a corto plazo. La situación era doblemente preocupante en casi el 35% de ellas, pues a su pasivo sumaban sus números rojos en al menos dos años seguidos.

lunes, 29 de agosto de 2022



domingo, 28 de agosto de 2022



Vista de Peñaflor de Hornija, rodeado por algunos de los aerogeneradores instalados en su término municipal. RAMÓN GÓMEZ

El 95% de las instalaciones eléctricas de Castilla y León son de fuentes renovables

La comunidad produce en total 27.000 Gwh, el doble de lo que consume y el resto se bombea, sobre todo, a Madrid

ÁNGEL BLANCO



VALLADOLID. Castilla y León se mantiene un año más como la comunidad con mayor potencia instalada en lo que respecta a energías renovables y como la que más electricidad genera con estas fuentes. Además, logra el hito histórico de contar con un parque que genera energía a partir de fuentes limpias (el viento, el agua y el sol) en el 95,4%, el porcentaje más alto de España.

No obstante, pierde parte de su ventaja productiva. Los 11.908 Mw de capacidad con que cuentan las instalaciones eólicas, fotovoltaicas e hidráulicas de la comunidad le permitieron conservar en 2021 el primer puesto por autonomías (segunda fue Andalucía, con 8.609 Mw), si bien su poderío se ve erosionado porque otras comunidades aceleran más. Cinco años atrás, cuando la región contaba con 10.617 Mw, la que se situaba por detrás era Galicia con 7.136 y, durante ese lapso temporal, Castilla y León ha incrementado su potencia instalada tres veces menos que el conjunto de comunidades autónomas. Algo similar ha sucedido, según la información facilitada por Red Eléctrica, con la generación renovable, que fue el 89% del total.

Entre 2016 y 2021, Aragón (122%) y Murcia (110%) han duplicado con creces su potencia renovable instalada, mientras que Castilla y León la ha incre-

PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Fuente: Red Eléctrica

	Potencia Instalada (Mw)			Generación (Gwh)		
	2016	2021	% Var.	2016	2021	% Var.
Galicia	7.136	7.717	8,14	17.453	17.979	3,01
Asturias	1.345	1.554	15,54	3.003	3.221	7,26
Cantabria	154	156	1,30	427	412	-3,51
País Vasco	422	470	11,37	1.003	1.140	13,66
Navarra	1.468	1.750	19,21	3.590	4.273	19,03
Aragón	3.328	7.410	122,66	7.612	14.877	95,44
Cataluña	3.577	3.591	0,39	7.444	6.766	-9,11
C. Valenciana	2.250	2.353	4,58	3.559	3.369	-5,34
Murcia	781	1.645	110,63	1.407	2.610	85,50
Castilla-La Mancha	5.782	8.140	40,78	11.089	13.398	20,82
Andalucía	6.051	8.609	42,27	12.843	16.265	26,64
Extremadura	3.725	7.089	90,31	5.719	9.375	63,93
Madrid	223	232	4,04	447	495	10,74
La Rioja	594	603	1,52	1.247	1.198	-3,93
Baleares	121	192	58,68	258	313	21,32
Canarias	335	761	127,16	702	1.606	128,77
Castilla y León	10.617	11.908	12,16	22.941	24.068	4,91
TOTAL	47.909	64.180	33,96	100.744	121.365	20,47

mentado el 12,16% en un contexto en que la media nacional ha crecido el 33,96%.

Durante el pasado año, el entorno energético en España continuó su recuperación tras el impacto de la pandemia de covid y registró un incremento de potencia instalada renovable del 7,2% respecto a 2020, esto es 4.338 Mw. Las instalaciones de energía renovable representan el 56,7% del parque generador de energía eléctrica en España.

En Castilla y León, una vez di-

Se sitúan tras Castilla y León en tasa de potencia renovable Extremadura y Castilla-La Mancha, con algo más del 77%

La inversión es mayor en otras autonomías y la generación renovable de la región crece cinco veces menos que la media

namitadas las centrales térmicas y con La nuclear de Garoña en proceso de desmantelamiento, supera el 95%.

De los casi 12.000 Mw instalados, 6.384 son eólicos, 4.398 hidráulicos y 1.026, de solar fotovoltaica. Los 577 Mw no renovables proceden de la cogeneración.

A nivel nacional, el incremento interanual de potencia instalada renovable se ha debido, principalmente, al aumento de la potencia solar fotovoltaica que ha aportado un 80,4% de la nueva

Valladolid, Soria y Ávila reducen su consumo

La demanda eléctrica se incrementó el año pasado en Castilla y León el 1,72% con respecto al precedente, marcado por el estallido de la pandemia, según datos provisionales facilitados por el Ente Regional de la Energía (EREN). Con el final de los confinamientos, el consumo residencial se redujo el 2,58%, mientras que el del sector servicios aumentó el 0,64%. Por lo que respecta a la industria, su demanda de electricidad creció el 5,01%.

Sels de las nueve provincias

vieron aumentada su demanda de electricidad el 2021, encabezadas por Segovia (6,1%), Burgos (5,5%) y León (2,5%). Por el contrario, Soria demandó el pasado año menos electricidad que en el ejercicio precedente (4,6%). También registraron descensos, leves en este caso, Valladolid (0,7%) y Ávila (0,2%).

potencia, mientras que la eólica ha aportado 839 Mw adicionales a la nueva potencia renovable, lo que la mantiene como la tecnología protagonista en el parque generador nacional.

En la comunidad, la potencia eólica instalada se incrementó el 1,8%, mientras que la solar lo hizo el 21,5%, en un año en el que la potencia total se redujo el 12,9% por la desaparición de la aportación del carbón.

Por lo que a la generación respecta, las instalaciones renovables de la comunidad aportaron al sistema eléctrico nacional 24.068 Gwh, el 4,9% más que cinco años atrás, frente a un incremento medio del agregado autonómico del 20,4%. Eso sí, el pasado ejercicio, Castilla y León volvió a ser la comunidad con mayor generación renovable del país y alcanzó el 89,1% del total de la producción de la región, máximo histórico de participación desde que se cuenta con registros. Tanto la generación como la cobertura en el mix son los datos más altos de toda España en 2021.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que mientras el porcentaje de participación de la generación renovable de Castilla y León sobre el total nacional era del 22,2% en 2016, cinco años después ha bajado al 19,8%.

Record de cuota verde

La eólica fue el pasado año la primera tecnología de la estructura de generación de Castilla y León y aportó casi la mitad del 'mix' (49,1%), lo que permitió a la comunidad auparse como la que más energía eléctrica generó a partir de la fuerza del viento (13.255 Gwh). A la eólica, le sigue la hidráulica, responsable del 32,4%, con un 9% más que en 2020.

El pasado ejercicio fue el primero en la historia de la comunidad en el que el carbón desapareció por completo de la estructura de generación, al no haber ya con potencia instalada. De esta forma, el parque de generación de Castilla y León fue el año pasado renovable al 95,4%, el porcentaje más alto de España.

La segunda comunidad es Extremadura, con el 77,8% (cuenta con la central nuclear de Almaraz) y la tercera es Castilla-La Mancha, con el 77,5% (además, de la nuclear de Trillo tiene una central de ciclo combinado en Guadalajara).

De los 27.016 Gwh producidos en la comunidad (solo superados por los 29.586 de Andalucía), fueron consumidos en el territorio 13.670, es decir la mitad. Los restantes 12.736 fueron el saldo de los intercambios (609 fueron los consumos de los bombeos), destinados principalmente a Madrid. Por ello, la principal obra acometida por REE en 2021 en la comunidad fue la construcción del eje Tordesillas-Galapagar-San Sebastián de los Reyes a 400 kV para el mallado entre Castilla y León y Madrid, en el tramo que va de Segovia a la comunidad capitalina.

VALLADOLID

El 57% de los graduados de la UVa logran un contrato laboral en base a su formación

Los egresados de la ULE son los que más cobran en sus empleos, 30.000 euros anuales de media frente a los 25.000 de los de la Universidad de Burgos o los 27.000 de los titulados en la institución de Valladolid

RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Para la inmensa mayoría de los estudiantes universitarios su objetivo es encontrar un trabajo acorde a su formación una vez consiguen el título. En este sentido, aquellos que cursan su grado en la Universidad de León son los que más posibilidades tienen de satisfacer estas aspiraciones, ya que prácticamente el 70% de los egresados de esta institución logran un contrato como titulados a los cuatro años.

Son datos del Ranking de Universidades Españolas U-Ranking, elaborado por la fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que sitúa a la Universidad de León como la mejor de la Comunidad en términos de inserción. Según el último informe, el 69,6% de sus alumnos acaba en un empleo acorde a su formación, casi diez puntos por encima de la media española y hasta veinte del resto de instituciones educativas de Castilla y León.

Así, la siguiente en la lista es la Universidad de Salamanca, donde el porcentaje de egresados contratados como titulados desciende drásticamente hasta menos de un 59%, concretamente al 58,8. Es una cifra muy parecida, aunque ligeramente superior, a la que arroja la Universidad de Valladolid, donde solo el 57% de sus titulados logra un trabajo en base a sus formación a los cuatro años de acabar la carrera.

En cualquier caso, la institución



Rectorado de la Universidad de León, la mejor en inserción laboral de la Comunidad. e. m.

universitaria de Castilla y León con peores datos en los que a inserción laboral con contratos de titulados se refiere es la Universidad de Burgos, donde menos de la mitad de los alumnos, el 49,6%, logran trabajar de acuerdo a sus conocimientos en los siguientes 48 meses a conseguir el título.

Por otro lado, el informe consultado por El Mundo de Castilla y León revela que las cifras de afiliación a la Seguridad Social de los titulados son algo superiores. En este caso, las universidades de Valladolid y León logran resultados prácticamente idénticos, de

casi el 78% en ambos casos. Asimismo, la institución burgalesa también se coloca cerca, con un 76,8%. Por el contrario, solo el 69% de los estudiantes de la Universidad de Salamanca están afiliados. Hay que destacar, no obstante, que la diferencia entre unos datos y otros es que los afiliados, pese a estar en el mercado laboral, no cuentan con un empleo relacionado con su formación.

Otro de los indicadores que también presenta el informe y que resulta interesante es la retribución media anual que reciben los titulados de las diferentes univer-

sidades públicas de Castilla y León. Así, los de León son los mejor pagados, con más de 30.300 euros anuales. En el resto de entidades educativas, esta cifra varía entre los 27.281 euros de la UVa, los 26.865 euros de la USal o los 25.578 de la UBU.

Una vez superada la EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) y pese a que la mayoría de estudiantes ya sabe el grado en que desea matricularse, la elección de una carrera universitaria depende de muchos factores como el vocacional pero también las salidas laborales y el

económico. De ahí el interés de estos datos del informe U-Ranking sobre todo a la hora de decantarse por un grado entre diferentes universidades. «La demanda puede reforzarse si la universidad ofrece titulaciones cuya inserción laboral es favorable, en especial si los resultados de inserción en una titulación concreta son mejores que los de otras instituciones académicas», remarca el estudio.

Un claro ejemplo, según la información consultada por Ical, es el grado de Ingeniería Informática que se ofrece en tres universidades públicas de la Comunidad pero con diferencias, tanto en tasa de afiliación como sueldo. La carrera en la UVa cuenta con un índice de contratación del 92% frente al 90,8% de la de León y el 89,1% de la USal. Eso sí, los titulados en la ULE en este grado tiene una base media de cotización de 34.726 euros, muy por encima de los 30.480 euros de la Universidad de Valladolid y los 29.961 euros de la de Salamanca.

Eso sí, hay diferencias por las ramas de enseñanza. No en vano, la base media de cotización a la Seguridad Social en el Sistema Universitario Español (que agrupa a las públicas y las privadas) oscila entre los 32.786 euros en los titulados con el máster en Ingeniería y Arquitectura, los 31.396 de Salud o los 31.165 de grados de Sociales y Jurídicas y los 24.242 euros de Ciencias y los 27.723 de Artes y Humanidades.

Europa se asoma a la recesión tras seis meses de guerra y una subida de precios sin control

Los organismos vaticinan que la actividad se contraerá en la eurozona a final de año por una crisis energética que hará limitar el consumo

EDURNE MARTÍNEZ

MADRID. La recesión en la eurozona parece inevitable. Después de dos años de pandemia donde la economía se desplomó como no se veía desde tiempos de guerra, la ansiada recuperación vuelve a truncarse. La guerra de Ucrania hizo saltar por los aires la buena marcha de la actividad y desde hace seis meses todos los precios se han disparado por la falta de materias primas y las complicaciones en las cadenas de suministro. Los datos así lo van anunciando: el último índice compuesto de gestores de compra (PMI) cayó en agosto por segundo mes consecutivo, hasta los 49,2 puntos. Que la cifra esté por debajo de 50 indica contracción económica, algo que no se veía desde el verano de 2020, en plena pandemia.

Este dato mide las expectativas en base a las actuales condiciones de la actividad, por lo que es uno de los más seguidos por el mercado para evaluar la salud económica de un país o región, en este caso no muy positiva. El jefe de Economía de S&P Global, responsables del informe, Andrew Harker, señaló tras conocer los datos que estos apuntan a «una economía en contracción durante el tercer trimestre del año». Las cifras revelan que ha habido una caída de la producción de muchos sectores, desde el automovilístico al turístico o el inmobiliario, lo que conllevará que la recuperación laboral tras la pandemia también pierda fuerza «con empresas cada vez más reacias a contratar más personal» por la caída de la demanda.

Los dos países que más han notado el desplome de este indicador son Francia y Alemania, precisamente las dos potencias que más tiran de la economía europea. El PMI de Alemania se situó en agosto muy por debajo de la media europea, en los 47,6 puntos, su peor lectura en más de dos años. Pero es que en Francia el desplome ha sido menos acusado pero más significativo, pasando de 52 puntos en julio a caer en contracción en agosto al situarse en 49,8.

Ha sido nada menos que el Bundesbank, el banco central de Alemania, quien ha advertido esta semana de que el país está amenazado por una recesión por los altos precios de la energía y los

problemas en las cadenas de suministro, factores clave para la gran industria alemana. Esta contracción de la actividad podría desembocar en una recesión en el primer trimestre de 2023, señalaron. Tras este pronóstico, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, advirtió de que la inflación podría alcanzar el 10% en Alemania el próximo otoño (en julio se situó en el 8,5%) batiendo todos los récords, y reclamó una nueva subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para contener el consumo y rebajar los precios.

Los temores del BCE

Este mismo organismo también vislumbra la recesión como uno de los escenarios más probables en los próximos meses. La representante alemana del comité ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel, alertó recientemente en una entrevista con Reuters de que si el suministro de energía de Rusia

Evolución de la inflación en la eurozona en el último año (en %)



Fuente: Eurostat

GRÁFICO R.C.

se complica aún más la eurozona entrará en recesión técnica (dos trimestres consecutivos con un crecimiento económico por debajo de cero). Señaló que el 'shock' de los precios de la energía es «demasiado grande» para compensar la capacidad de adaptarse de la economía europea. Aun

CONTRACCIÓN ECONÓMICA

49,2

El índice PMI de la eurozona cayó por debajo de 50 en agosto, algo que no se veía desde 2020 y que implica contracción de la economía.

así, aseguró que el deterioro previsto de la actividad en la eurozona no indica que vaya a producirse una «recesión prolongada y profunda» como ocurrió en la crisis de 2008.

Expertos consultados aseveran que la política monetaria europea tan expansiva dio lugar a tipos de interés negativos que han provocado una «inflación descontrolada» impulsada por la guerra de Ucrania. El profesor de la Universidad Europea Daniel Arnaiz considera que la recesión será «bastante persistente» porque esta política restrictiva tiene efectos «mucho más lentos» que la expansiva, lo que «ralentizará el comienzo de la corrección económica».

Además, opina que España quedará tan afectada como el resto de países de la zona euro porque «todos son dependientes de las políticas monetarias del BCE pese a las características individuales de cada país».

lunes, 29 de agosto de 2022



sábado, 27 de agosto de 2022

Ayudas de 7 M€ para la prestación de servicios en las provincias y El Bierzo

VALLADOLID
La Consejería de la Presidencia publicó ayer tres órdenes por las que se conceden ayudas a diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal del Bierzo para sostenimiento de oficinas de asistencia a municipios, políticas sociales e infraestructura y equipamiento local, que en su conjunto suman 7.173.735 euros conforme a los presupuestos prorrogados de 2021.

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, en un audio difundido por el servicio de prensa de su Consejería, explicó que estas ayudas son «expresión clara del compromiso de Alfonso Fernández Mañueco y del Go-

bierno de Castilla y León con el municipalismo» y destaca que redundan en el bienestar de ayuntamientos, funcionarios y vecinos.

Las tres órdenes se enmarcan en el ámbito de la cooperación económica local general 2022 por lo que las ayudas se deben ejecutar en este año, según recogen las normas publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Así, se contemplan 2.941.735,43 euros para el sostenimiento de las oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios y para la formación o actualización de inventarios de bienes de las Entidades Locales de Castilla y León. Esta línea suma

3.460.865 con los 519.129 aportados por las entidades locales, in forma Ical.

De la aportación de la Junta, la Diputación de Ávila recibe 269.848 euros; la Diputación de Burgos, 398.745; El Bierzo, 200.843; la Diputación de León, 377.480; la Diputación de Palencia, 283.486; la Diputación de Salamanca, 379.481; la Diputación de Segovia, 242.941; la Diputación de Soria, 207.429; la Diputación de Valladolid, 308.489; la Diputación de Zamora, 272.988 euros.

Además, Presidencia ha resuelto las ayudas para sufragar gastos propios por operaciones corrientes referidos a los centros de

tratamiento de personas con discapacidad psíquica y las plazas residenciales concertadas en relación con personas que padecen enfermedades mentales, cuyo presupuesto asciende a 4.153.193 euros.

En este caso, la Diputación de Ávila cuenta con 254.542 euros; la de León con 1.218.108 euros; la de Palencia con 802.736 euros; la de Salamanca con 52.623 euros; la de Segovia con 359.211; la de Soria con 710.854 euros; la de Zamora con 755.116 euros.

Por último, la orden por la que se conceden ayudas a las diputaciones provinciales para la encuesta de infraestructura y equipamiento local asciende a 78.807 euros, que cuenta con una aportación de 13.907 euros de las entidades locales, hasta los 92.715,21 euros. Las nueve diputaciones reciben la misma subvención de la Junta, 8.756 euros.